

Santiago, uno de marzo de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En estos autos Rol N° 3-2011 con fecha once de octubre de dos mil veintidós, la Ministra en Visita Extraordinaria, Sra. María Jimena Pinto Aguilar, resolvió lo siguiente:

Condenar a Nolberto Raddatz Corrales, como cómplice del delito consumado de aplicación de tormentos con resultado de muerte en la persona de Martín Gustavo Miranda Aguilar, cometido en Puerto Natales, en la Segunda Comisaría de Carabineros, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de diciembre de 1976, a la sanción de tres años de presidio menor en su grado medio, las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y las costas de la causa. En consecuencia, se rechazan las solicitudes de amnistía y media prescripción.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, en cuanto a lo penal, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia que condenó a Nolberto Raddatz Corrales en calidad de cómplice del delito consumado de aplicación de tormentos con resultado de muerte en la persona de Martín Gustavo Miranda Aguilar.

Este fallo confirma las demás decisiones tal como se determinaron en primera instancia.

Contra esta última sentencia, se dedujeron los recursos de casación en el fondo que más adelante se examinarán, todos los que se ordenó traer en relación.

**Y considerando:**

1º) Que, la parte querellante Programa de Derechos Humanos, de la



Subsecretaría de Derechos Humanos, dedujo recurso de casación en el fondo amparado en la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal en relación a los artículos 15, 16 y 150 del Código Penal.

Indica que el tribunal califica de cómplice la participación de Nolberto Raddatz Corrales, lo cual lo confirmó el tribunal de alzada, porque entiende que solo pueden ser autores del hecho criminal acreditado en autos, quienes ejecutan directamente el ilícito. No obstante, desconoce las otras hipótesis de autoría establecidas por el legislador en el artículo 15 del Código Penal.

Destaca que la doctrina ha sido categórica en señalar que el concierto al que refiere el legislador en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, no necesariamente debe ser expreso, ni tratarse de un plan acabado, inclusive se ha aceptado que sea tácito, como también puede surgir en el curso de ésta, tal como lo han expresado los tribunales superiores de justicia. Dicho concierto previo se encuentra acreditado en autos, en los propios dichos del acusado Nolberto Raddatz Corrales, citados en el punto 1.1 y los hechos criminales debidamente acreditados en autos, todo lo cual permite establecer la existencia del concierto previo.

Concluye que la participación de Raddatz Corrales debe ser reconducida a la hipótesis normativa del artículo 15 N.º 3 del Código Penal, por cuanto, si bien no ejecutó directamente el hecho delictivo sí lo presenció facilitando los medios para su comisión.

Añade que en los hechos concurren los elementos de la teoría del dominio funcional. Ciertamente Raddatz Corrales, tenía dominio del hecho, a pesar de que no realiza completamente la acción típica, no obstante, su aporte durante la etapa



de ejecución del delito es indispensable para realización de la figura delictiva. Es decir, existe una ejecución conjunta del hecho típico y la decisión común de ejecutar el hecho típico, donde además se distingue la división del trabajo y plan del hecho, por básico y elemental que sea.

Finalmente, pide que se anule la sentencia de segunda instancia por haberse incurrido en error de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo antes señalado, y se dicte sentencia de reemplazo condenando a Nolberto Raddatz Corrales en calidad de autor, del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, aplicando la pena de presidio mayor en su grado medio.

Que, en la audiencia de estilo la recurrente se desistió del recurso de casación en la forma, de manera que éste se tiene por desistido y no se emitirá pronunciamiento al respecto.

**2º)** Que, la parte querellante Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo recurso de casación sustentado en la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal en relación los artículos 150 N° 1 y 391 N° 2 del Código Penal

Indica que la norma en cuestión, en principio, establece que el autor del delito consumado de aplicación de tormentos debe ser condenado con presidio menor en cualesquiera de sus grados; sin embargo, en el caso de existir lesiones o la muerte de la víctima se deberá estar a dichos tipos penales en sus grados máximos.

Señala que, en este caso, don Martín Gustavo Miranda Aguilar falleció como consecuencia de las torturas de las que fue objeto, por lo que para efectos de la sanción debe aplicar el grado máximo de la pena asignada al delito



consumado de homicidio simple -391 N°2 del Código Penal-.

Destaca que, considerando que a la época de los hechos el homicidio simple se sancionaba con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, en el caso de autos la pena base sobre la que se debe determinar la sanción de Nolberto Raddatz Corrales es la de presidio mayor en su grado medio.

Después, atendido que su participación es la de cómplice, se debe bajar en un grado dicha sanción a presidio mayor en su grado mínimo; por lo que, considerando que concurre una circunstancia atenuante dicha sanción, debe aplicarse en su mínimo, según el inciso segundo del artículo 67 del Código Penal.

Termina solicitando que se anule la resolución impugnada y se proceda a dictar, acto seguido y sin nueva vista, la correspondiente sentencia de reemplazo, en que se declare que el condenado como cómplice del delito consumado de aplicación de tormentos con resultado de muerte, Nolberto Raddatz Corrales, debe soportar una pena de presidio mayor en su grado mínimo en su mínimo.

**3°)** Que, la sentencia recurrida estableció como probados los siguientes hechos, constitutivos del delito consumado de aplicación de tormentos con resultado de muerte del entonces vigente artículo 150 N° 1 del Código Penal, calificándolo como de lesa humanidad, atendido el contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de que formó parte:

*“En Puerto Natales, la noche del 18 al 19 de diciembre de 1976, pasadas las 21:30 horas, Martín Gustavo Miranda Aguilar sufrió tormentos en la Sala de la Guardia de la Segunda Comisaría de Carabineros, hasta donde había sido conducido por una patrulla de carabineros, detenido por ebriedad*



*aproximadamente a esa hora, consistentes en golpes en su cuerpo, tórax y cabeza, proferidas para obtener que se identificara ya que no portaba carnet de identidad, que lo dejaron semi inconsciente, estado en que fue trasladado y encerrado en el calabozo, desde donde no le es permitido salir, hasta que la mañana siguiente, entre las 10 y las 11 horas cuando fue conducido la Cárcel Pública, por no haber pagado la multa impuesta por ebriedad, lugar en el cual fue advertido por otros prisioneros su deplorable condición física con evidencias de golpes y manchas de sangre en su rostro, cuerpo y ropas, también en mal estado. Castigo que le causó en definitiva la muerte el 23 de diciembre de 1976, a las 20:15 horas, cuya causa precisa y necesaria fue un shock séptico producto de una peritonitis generalizada como consecuencia de una ruptura intestinal traumática. Las lesiones traumáticas fueron producidas por contusiones con objeto romo que puede incluir golpes de puños, codos, rodillas. Fueron productos de terceros”.*

**4º)** Que en cuanto a la participación punible del condenado Nolberto Raddatz Corrales —que el sentenciador de fondo calificó de complicidad—, se establecieron como hechos probados que *“al mismo tiempo que se producía la agresión estaba de guardia, encargado del calabozo y las llaves, estuvo en condiciones de abrirlo y es él mismo quien manifiesta que condujo al detenido y concurrió al menos en tres oportunidades, a dicho calabozo”.*

**5º)** Que, según se desprende del tenor de los recursos interpuestos, ninguno de los recurrentes ni tampoco el condenado —quien se conformó con lo resuelto por los jueces del grado— impugnan los hechos constitutivos de delito por los que se le condena ni su calificación jurídica como delitos de tormentos



seguidos de muerte, en grado de consumado, de conformidad con lo dispuesto en el entonces vigente artículo 150 N° 1 del Código Penal.

En consecuencia, el orden lógico de su análisis impone referirse, primero, a aquel arbitrio que propone la existencia de una errónea calificación de la participación en el hecho del condenado, cuya determinación es esencial para establecer la medida de la pena a imponer y sostener, sobre tal base, la errada o no aplicación de las reglas de determinación de la pena aplicables al delito, en atención a sus grados de desarrollo y participación.

6º) Que, al respecto, cabe, en primer término, mencionar que para calificar la participación del imputado como complicidad del artículo 16 del Código Penal, la sentenciadora del grado se fundamenta en el hecho de que —sin desconocer que el condenado *“al mismo tiempo que se producía la agresión estaba de guardia, encargado del calabozo y las llaves, estuvo en condiciones de abrirlo y es él mismo quien manifiesta que condujo al detenido y concurrió al menos en tres oportunidades, a dicho calabozo”* — ha tenido también por establecido que las lesiones que condujeron a la muerte de Miranda Aguilar fueron *“producidas por golpes de karate”*, aparentemente asestados por una persona vestida de civil, de estatura inferior a la del condenado, no existiendo *“indicios de que el día de los hechos, el acusado haya vestido de civil, al contrario, estaba de guardia, lo que apunta a que vestía uniforme institucional”*.

7º) Que, como lo postula la parte querellante, Programa de Derechos Humanos, efectivamente yerra en esta parte la sentencia pues al aplicar a estos hechos lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, deja sin aplicación lo que dispone su artículo 15 N° 3, que considera y sanciona como autor, también a “Los



*que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”.*

8º) En efecto, el art. 15 N° 3 del Código punitivo permite atribuir la realización completa de un tipo penal a quien no lo ha ejecutado de manera inmediata y directa, como sería el caso de quien le habría propinado a la víctima en la especie aquellos golpes de karate a que se refiere la sentencia impugnada, sino con otros, siempre que concurren las exigencias que allí se señalan: acuerdo previo y facilitación de los medios con que se comete o presencia pasiva ante su realización. En tales casos, el acuerdo previo permite la imputación de los hechos del ejecutor material a quienes le facilitan los medios o presencian su comisión sin impedirla, sin que hayan tomado parte inmediata y directa en su ejecución.

Luego, en nuestro Derecho Penal, para la calificación como autor de un hecho no se requiere únicamente realizar todo o al menos una parte de la descripción del tipo penal, sino que ello es también posible cuando se realizan las formas de intervención punible que expresan los diferentes numerales del artículo 15 del Código del ramo, en un contexto fáctico que excede los elementos de la realidad subsumibles en el tipo penal, careciendo de fundamento legal una aproximación objetivo-formal, que solo permitiría fijar los casos de coautoría más evidentes, sin lograr captar la complejidad de las relaciones entre los hechos y todas las descripciones típicas, pues sería únicamente aplicable a delitos descritos con diferentes conductas (por ejemplo, ejercer la intimidación para forzar la voluntad o la fuerza para entrar a un lugar habitado, por una parte, y proceder al acceso carnal o a la apropiación, por otra, arts. 361 N.º 1 y 440).



Luego, el fundamento para imputar en los casos del artículo 15 N° 3 la autoría no es una consideración formal respecto de la descripción típica —pues la ejecución de manera inmediata y directa de los hechos punibles está descrita en el N° 1 de dicho artículo—, sino material, que emana de la existencia del hecho colectivo que abarca las diferentes contribuciones de los distintos intervinientes, que se imputan recíprocamente para otorgarle a cada uno el título de autor.

Ese hecho colectivo se define por el acuerdo o concierto para su realización: el conocimiento y voluntad de realización de cada una de las partes del hecho individual que a cada uno corresponde y del hecho conjunto que de este modo se materializa, razón por la cual, aunque individualmente ninguno de los coautores realice el tipo penal, todos responden como si cada uno lo hubiera realizado completamente, imputándoseles a unos y otros, recíprocamente, sus contribuciones individuales.

Luego, la responsabilidad individual por el hecho colectivo significa que, en virtud del vínculo que crea el acuerdo de voluntades, cada uno de los intervinientes se puede considerar responsable del hecho colectivo como un todo, tal como lo enuncia el artículo 15 N° 3 del Código Penal.

Este elemento subjetivo adicional exige que todos los responsables acuerden la realización de un delito determinado, el lugar, modo y tiempo de ejecutarlo, así como la decisión sería de ponerlo por obra, aunque no se requiere un acuerdo acerca de todos y cada uno de los detalles de su ejecución, ni premeditación ni su puesta por escrito.

**9º)** Que, como se ha transcrito, en la especie la sentenciadora del grado tuvo por acreditado que el condenado Nolberto Raddatz Corrales “*al mismo*





*tiempo que se producía la agresión estaba de guardia, encargado del calabozo y las llaves, estuvo en condiciones de abrirlo y es él mismo quien manifiesta que condujo al detenido y concurrió al menos en tres oportunidades, a dicho calabozo”, lo que importa su presencia en el hecho sin tomar parte en su ejecución material y directa, pero incrementando con ello el peligro de realización que supuso un aseguramiento o respaldo a los ejecutores directos, facilitándoles el ingreso al lugar donde mantenía encerrada a la víctima, en su calidad de guardia encargado del calabozo en que ella se encontraba, sin que realizara ningún hecho tendiente a impedirla o demostrar su desacuerdo con los tormentos que se le aplicaban ni su presencia en el lugar fuese equivalente a la de un vigilante casual o un compinche que se integra fortuitamente al hecho.*

*En efecto, la sentenciadora del grado ha tenido por “establecido que Martín Gustavo Miranda Aguilar fue agredido mientras estuvo en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales, donde fue ingresado el 18 de diciembre de 1976, después de haber sido detenido alrededor de las 21:30 horas, y retirado el domingo 19 de diciembre de 1976, en horas de la mañana, alrededor de las 11:00 hrs. en circunstancias que dentro de ese lapso se desarrolló el turno del acusado Raddatz Corrales quien se desempeñaba en la guardia con el Sargento 2do José Cárcamo Alvarado y el Cabo 1º José Pozo Aros (actualmente fallecidos)”;* que *“las personas que ingresaron al calabozo fueron el Sargento José Cárcamo Alvarado y el Carabinero Nolberto Raddatz Corrales”;* que *“como 3 horas después, con el Sargento Cárcamo, fueron al calabozo pero no consiguieron hablar con el hombre, después de un rato regresaron, se identificó como Martín Vidal y proporcionó el domicilio, los restantes datos los obtuvieron de partes anteriores”;* que el



condenado *“a la vez, era uno de los responsables de los detenidos por estar de guardia”*; que *“no había ninguna posibilidad del ingreso a los calabozos, de un funcionario distinto a los de guardia sin que ellos le hubiesen entregado las llaves de estos”*; y que *“Raddatz Corrales entregó el turno a las 8:00, de la mañana del 19 de diciembre de 1976, a los funcionarios Héctor Leiva Passarini, Óscar Barra Montoya, Héctor René Saldivia Bórquez, quienes se recibieron sin novedad”*; concluyendo que *“la falta de registro viene siendo una forma típica de ocultamiento de los hechos, dificultar su esclarecimiento si se investiga, el silencio concertado propio del contexto y naturaleza de estos delitos de lesa humanidad”*.

Así las cosas, yerra la sentencia en examen al calificar la participación de Raddatz Corrales como de complicidad del artículo 16 del Código Penal, correspondiendo a la de autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal, porque los mismos hechos y circunstancias que sirvieron al fallo recurrido para efectuar esa errada calificación, se subsumen en la autoría del citado 15 N° 3, error que tiene influencia en lo dispositivo del fallo, por cuanto condujo a la imposición de una pena inferior a la que en derecho correspondía, lo que deberá ser subsanado, invalidando la sentencia y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.

**10°)** Que, respecto al recurso de casación en el fondo deducido por Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), fundado en la errada determinación de la pena, al fijar el marco punitivo en el rango de presidio menor en su grado medio, marco correspondiente a la pena de aplicación de tormentos sin considerar el resultado de muerte, aunque ello también implica un error, el recurso lo fundamenta afirmando al mismo tiempo la calidad de cómplice del condenado, lo que ya ha sido desechado por este Tribunal, razón por la cual



resulta imposible un pronunciamiento al respecto, sin perjuicio de que, como el recurso postula, debe hacerse la determinación de la pena considerando el resultado de muerte en la imposición de los tormentos —lo que no hizo el sentenciador del grado—.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 500, 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil, se resuelve lo siguiente:

**I.- Se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por la Unidad Programa de Derechos Humanos, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de cinco de junio de dos mil veintitrés, la cual es nula y se la reemplaza por la que se dicta inmediatamente a continuación, sin nueva vista, pero separadamente, no emitiéndose pronunciamiento sobre el deducido por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Regístrese.

Redacción del Ministro Sr. Matus.

Rol N° 153634-23

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm O., Jean Pierre Matus A., la Ministra Suplente Sra. María Loreto Gutiérrez A., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G., y Leonor Etcheberry C. No firman el Ministro Sr. Dahm y la Ministra (S) Sra. Gutiérrez, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones y haber culminado su periodo de suplencia.



JEAN PIERRE MATUS ACUÑA  
MINISTRO

Fecha: 01/03/2024 13:26:23

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT

ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 01/03/2024 14:01:45

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 01/03/2024 13:26:24



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro Jean Pierre Matus A. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Pía Verena Tavorari G. Santiago, uno de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a uno de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, uno de marzo de dos mil veinticuatro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

**Vistos:** Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción, en su motivo 11°, de las frases participó en calidad de cómplice, en los términos del artículo 16 del Código Penal”; los motivos vigésimo primero a vigésimo tercero que se eliminan.

Se reproduce del fallo de casación los motivos 3° a 9°

**Y teniendo, además, presente:**

1°) Que, el artículo 15 N° 3 del Código Penal considera y sanciona como autor, también a *“Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”*.

2°) Que, como se señaló en el considerando 17° del fallo en alzada, Raddatz, no solo se encontraba de guardia entre la noche del 18 y el 19 de diciembre de 1976 en la Comisaría de Puerto Natales, sino que además era el custodio del calabozo y el único que tenía las llaves del mismo. De manera que sin su acuerdo, no hubiera sido posible que este hubiera sido golpeado por un tercero, hasta ocasionarle la muerte días después.

En efecto al momento que la víctima llega a la comisaría es recibida sin novedad por la guardia de la comisaría y a la mañana siguiente tanto los policías que lo llevan a la cárcel pública, como los gendarmes y otros presos dan cuenta que venía con restos de sangre en su ropa, y muy decaído y a maltraer. Al ser consultado por el motivo de su estado le refiere a otros internos como a personal médico que había sido golpeado por carabineros.



Así las cosas la agresión que recibió la víctima ocurrió necesariamente en la comisaria de Puerto Natales, en la cual Raddatz estuvo de guardia y encargado de los calabozos.

**3°)** Que, tal descripción da cuenta de acciones que el condenado presencié, previo concierto con quienes, de manera inmediata y directa, propinaron a la víctima los golpes que le produjeron la muerte.

**4°)** Que, así las cosas, la participación de Raddatz en el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte corresponde a la de autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal.

**5°)** Que, en cuanto a la determinación de la pena correspondiente a Raddatz, hay que tener presente que el autor del delito consumado de aplicación de tormentos con resultado de muerte debía ser condenado, de conformidad con lo dispuesto en el entonces vigente artículo 150 n° 1 del Código Penal, con la pena prevista para el delito de homicidio cometido, en su grado máximo.

En la especie quedó acreditado que don Martín Gustavo Miranda Aguilar falleció como consecuencia de las torturas de las que fue objeto, por lo que para efectos de la sanción se debe aplicar el grado máximo de la pena asignada al delito consumado de homicidio simple artículo 391 N°2 del Código Penal.

Que, a la época de los hechos el homicidio simple se sancionaba con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, en el caso de autos la pena base sobre la que se debe determinar la sanción de Nolberto Raddatz Corrales es la de presidio mayor en su grado medio, la que se aplicará en su mínimum dada la concurrencia de una atenuante de responsabilidad penal, esto es la irreprochable conducta anterior y ninguna agravante.

**6°)** Que, atento el rango de la pena impuesta al sentenciado, no concurren los requisitos de la ley 18.216, por lo que el cumplimiento de la pena será efectivo.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 178, 180 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se **CONFIRMA** la sentencia apelada de once de octubre de dos mil veintidós dictada por la Ministra en Visita Extraordinaria, Sra. Marta Jimena Pinto Salazar, **con declaración** que Nolberto Raddatz Corrales, ya individualizado, queda condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito consumado de aplicación de tormentos con resultado de muerte en la persona de Martin Gustavo Miranda Aguilar, cometido en Puerto Natales, Segunda Comisaría de Carabineros, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de diciembre de 1976 y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa.

La referida sanción la cumplirá efectivamente, abonándosele el tiempo que permaneció privado de libertad, esto es, del 4 al 6 de mayo de 2016, según consta a fojas 1021 y fojas 1044.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del Ministro Sr. Matus.

Rol N° 153.634-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm O., Jean Pierre Matus A., la Ministra Suplente Sra. María Loreto Gutiérrez A., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G., y Leonor Etcheberry C. No firman el Ministro Sr. Dahm y la Ministra (S) Sra. Gutiérrez, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones y haber culminado su periodo de suplencia.





JEAN PIERRE MATUS ACUÑA  
MINISTRO  
Fecha: 01/03/2024 13:26:25

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 01/03/2024 14:01:46

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 01/03/2024 13:26:26



En Santiago, a uno de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

